Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha dieciséis de octubre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente conformado con motivo del Recurso de Revisión **01231/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por la persona Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, Ayuntamiento de Chicoloapan, a la solicitud de acceso a la información 00016/CHICOLOA/IP/2024, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

**A N T E C E D E N T E S**

**I. Presentación de la solicitud de información**

Con fecha nueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Particular presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo sucesivo el SAIMEX, ante el Ayuntamiento de Chicoloapan, en los siguientes términos:

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*requiero los expedientes relacionados al permiso de funcionamiento comercial, de todos los comercios que se encuentran ubicados en el tramo de la carretera México-Texcoco, que forman parte del Municipio de Chicoloapan” (Sic).*

***MODALIDAD DE ENTREGA*** *A través del SAIMEX.*

**II. Respuesta del Sujeto Obligado.**

Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado notificó, a través del SAIMEX, la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, en la que señaló lo siguiente:

*“…Al respecto se informa que, derivado de una búsqueda exhaustiva en el archivo de esta área, a la fecha no se encontró registro de expedientes de funcionamiento comercial del ejercicio fiscal 2024, por encontrarse dentro del período obsequiado para Refrendar Licencias de Funcionamiento que otorgan las leyes en la materia como lo es el Código Financiero del Estado de México y Municipios en el artículo 159 último párrafo y el Artículo 178 del Bando Municipal Vigente y con respecto a la Expedición de Licencias de Funcionamiento en lo que va del período no se ha recibido ningún trámite Sin otro particular por el momento, quedo de usted. A T E N T A M E N T E ROSA ISELA MEJÍA ALGARA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO*

*…” (Sic)*

A su respuesta adjuntó el oficio CHIC/PM/DDE/0017/2024, de fecha veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, signado por la Directora de Desarrollo Económico y dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual informó lo siguiente:

*“…derivado de una búsqueda exhaustiva en el archivo de esta área, a la fecha no se encontró registro de expedientes de funcionamiento comercial del ejercicio fiscal 2024, por encontrarse dentro del período obsequiado para Refrendar Licencias de Funcionamiento que otorgan las leyes en la materia como lo es el Código Financiero del Estado de México y Municipios en el artículo 159 último párrafo y el Artículo 178 del Bando Municipal Vigente y con respecto a la Expedición de Licencias de Funcionamiento en lo que va del período no se ha recibido ningún trámite*

*…” (Sic).*

**III. Interposición del Recurso de Revisión**

Con fecha cinco de marzo de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través del SAIMEX, Recurso de Revisión interpuesto por la parte Recurrente, en contra de la respuesta por el Sujeto Obligado, a la solicitud de información, en los siguientes términos:

***“ACTO IMPUGNADO***

*Respuesta del sujeto obligado” (Sic.)*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*Me refieren que no tienen expediente del año en curso cuando claramente solicite el expediente de todos los comercios que se encuentran sobre la carretera México-Texcoco, los cuales por razón lógica ya cuentan con un expediente” (Sic.)*

**IV. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto**

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El cinco de marzo de dos mil veinticuatro, el SAIMEX, asignó el número de expediente **01231/INFOEM/IP/RR/2024**, al medio de impugnación que nos ocupa, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y lo turnó al Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El ocho de marzo de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificado a las partes el mismo día, mes y año, a través del SAIMEX, en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado.** El veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, a través del SAIMEX, se recibió en este Instituto en el apartado de Informe Justificado, los archivos que a continuación se detallan:

I) Oficio CHIC/PM/UT/0093/2024, de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, por medio del cual de manera general señaló que hacía entrega de 13 licencias de funcionamiento, junto con el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de dos mil veinticuatro, mediante la cual se aprobó la versión pública de los documentos entregados.

II) Oficio CHIC/PM/DDE/031/2024, del veinte marzo de dos mil veinticuatro, signado por la Directora de Desarrollo Económico, a través de cual, señala los datos considerados confidenciales contenidos en los documentos que proporciona, así como acuerdo de clasificación, en el que señala los datos de naturaleza confidencial, a saber, nombres, INE, RFC, cuenta predial, clave y valor catastral, sello digital del emisor, folio fiscal, código QR, sello digital SAT, cadena original del Complemento de Certificación Digital del SAT, número de cuenta y CLABE interbancaria, número de teléfono, CURP, firmas, domicilio fiscal, domicilio para recibir notificaciones, número de placa de circulación vehicular, número de contrato de agua, fotografías de identificación, número de cliente, número de escritura pública y código de barras.

III) Oficio CHIC/PM/SA/142/2024, del quince de marzo de dos mil veinticuatro, signado por la Secretaría del Ayuntamiento, a través del cual de manera general solicitó se someta a consideración del Comité de Transparencia la reserva de la información al tratarse de bienes patrimoniales.

IV) Invitaciones realizadas por la Secretaría Técnica del Comité de Transparencia a sus integrantes para llevar a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia.

V) Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro, a través de la cual mediante acuerdo CHIC/PM/CT/0005/2024, se aprobó la clasificación de la información como confidencial de los datos contenidos en los documentos entregados.

VI) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DON VASCO.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento en el que se testó el número de licencia, RFC de empresa, código postal, identificación, superficie construida, clave catastral, contrato de servicio de agua, superficie de la unidad económica y superficie total del inmueble, registro municipal, folio de la licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, folio de registro de fuente fija contaminante, aforo, folio de dictamen de medidas de seguridad, folio de anuncio publicitario, nombre y firma del servidor público que expide documento.
2. Solicitud de trámite de licencia de funcionamiento en el que se testó el nombre del titular, RFC, superficie construida, superficie del establecimiento, superficie total del inmueble, niveles, clave catastral, nombre del apoderado legal.
3. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
4. Primer testimonio del contrato de sociedad mercantil, en el que se testó nombre de los otorgantes, folio, teléfono de notaria, nombre y firma de Notario Público, y se dejó visible la cantidad del capital social.
5. Permiso para constituir la Sociedad, en el que se testó el número de permiso, expediente, folio y el nombre de quien solicitó, firma y nombre de la servidora pública que expidió el documento.
6. Boleta de Inscripción ante el Instituto de la Función Registral, en la que se testó nombre y firma de servidor público que expide.
7. Estatutos de la sociedad.
8. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de folio, suministro, drenaje, importe de subsidio, subtotal y total a pagar, número de cuenta y código QR.
9. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil, en el que se testó el RFC de la empresa y nombre y firma de servidor público que expide.
10. Registro de Fuente fija contaminante, en el que se testó la clave catastral y RFC de empresa, así como nombre y firma de servidor público que expide.

VII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CASA VARGAS.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 48451/LF/23, en la que se testó el número de licencia, RFC de empresa, identificación, superficie construida, clave catastral, contrato de servicio de agua, superficie de la unidad económica y superficie total del inmueble, registro municipal, folio de la licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, folio de registro de fuente fija contaminante, folio de dictamen de medidas de seguridad, folio de anuncio publicitario.
2. Aviso de actualización o modificación de situación fiscal en la que se testó RFC de empresa, correo electrónico, número telefónico, CURP, nombre completo y fecha de nacimiento.
3. Acuse de actualización del registro federal de contribuyentes, en el que se testó RFC y folio, dirección electrónica del SAT para modificar datos, sello y cadena digital SAT.
4. Licencia de funcionamiento 48451, con número de registro CHIC/DRGyVP/LBI/0455/2021, en la que se restó la clave catastral, RFC, superficie total, superficie construida y superficie en uso, nombre y firma de servidor público que la emitió y autorizó.
5. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de serie, suministro, drenaje, tratamiento, importe de subsidio, IVA, subtotal y total pagado, número de cuenta y código QR.
6. Solicitud de trámite de licencia de funcionamiento en el que se testó el RFC, teléfono, superficie construida, superficie del establecimiento, superficie total del inmueble, clave catastral, contrato de agua, nombre y firma del apoderado legal.
7. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil, en la que se testo el nombre y firma del servidor público que lo expidió.
8. Fotografías del establecimiento.
9. Poder General para pleitos y cobranzas que otorgó la Sociedad denominada “Abarrotes Vargas” S.A. DE C.V., en el que se testó el nombre del presidente del consejo de administración y de las personas a las que se les otorgó el poder, nombre y firma del Notario público.
10. Recepción de compra en el que se testó el número de compra, RFC, fecha de compra e impresión, número de factura, subtotal, total, recibo, importe, descuento, subtotal, impuesto IEPS.
11. Constitución de Sociedad Anónima denominada “Abarrotes Vargas” S.A. DE C.V., en la que se testan los nombres de personas, monto del capital y se dejan visibles el valor nominal de las acciones, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, nombre de personas físicas.
12. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
13. Contrato de arrendamiento, en la que se testa el nombre de la persona arrendadora y el representante legal de la empresa, nombre de Notario Público, monto de renta y firmad del arrendador y arrendatario.
14. Pasaporte en el que se deja visible la nacionalidad, sexo, lugar de nacimiento, y fecha de caducidad.
15. Licencia de Uso de Suelo a nombre de la empresa, en la que se testó el número de folio, solicitud, clave catastral, superficie construida, superficie total del predio, clave, superficie mínima libre de construcción, lotes mínimos, número de comprobante de pago, firma y nombre de servidor público que expide.
16. Registro Municipal de Comercio.
17. Permiso anual para maniobras de carga y descarga en el que se testó el Folio.
18. Licencia de anuncios publicitarios, en el que se testó el número de factura original.
19. Solicitud de renovación de la Licencia de Funcionamiento.
20. Formato de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el que se dejó visible el nombre del propietario y se testó el número de licencia, expediente, recibo de pago, clave catastral valor estimado, boleta predial, superficie predial, superficie por construir y superficie de construcción a regularizar, derechos pagados, técnico responsable, cédula profesional y nombre y firma de servidor público que autorizó.
21. Croquis de ubicación y restricciones.

VIII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TE CREEMOS ADMINISTRACION Y SERVICIOS.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00468/LF/23, en la que se testó el RFC de empresa, clave catastral, contrato de servicio de agua, registro municipal, folio de la licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, folio de registro de fuente fija contaminante, folio de dictamen de medidas de seguridad nombre y firma de la persona que recibió el documento.
2. Solicitud de trámite de licencia de funcionamiento en el que se testó el RFC, teléfono, clave catastral, contrato de agua, nombre y firma del apoderado legal.
3. Licencia de funcionamiento 00468A, en la que se testó la clave catastral, RFC, número de registro municipal, contrato de agua.
4. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
5. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de serie, suministro, actualización, subtotal y total pagado, número de cuenta y código QR.
6. Primer Convenio Modificatorio del Contrato de Arrendamiento, en el que se testó el nombre del representante legal de la empresa y del arrendador, RFC, nombre de notario público y firmas de quienes intervinieron.
7. Registro de Fuente Fija Contaminante, en el que se testó la clave catastral, RFC, nombre y firma de servidor público que expidió el mismo.
8. Cédula Informativa de Zonificación, en el que se testó el número de expediente, superficie del terreno, clave, metros cuadrados de terreno bruto y neto, altura máxima de construcción, veces de la superficie del predio, frente mínimo, superficie mínima neta por lote, nombre y firma de servidor público que expidió el documento.
9. Fotografías del negocio.
10. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil, en el que se testó el RFC y nombre y firma del servidor público que emitió el documento.

IX) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AZULEMEX.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00368/LF/23, en la que se testó el RFC de empresa, número de identificación INE, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, registro municipal, folio de la licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, folio de registro de fuente fija contaminante, licencia de anuncio publicitario.
2. Solicitud de trámite de licencia de funcionamiento en el que se testó el RFC, teléfono, clave catastral, contrato de agua, superficie construida, superficie total del inmueble, superficie del establecimiento, domicilio, nombre y firma del apoderado legal.
3. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testo domicilio y RFC.
4. Licencia de uso de suelo en el que se testó clave catastral, superficie construida, superficie total del predio, superficie a construir, clave, superficie máxima de ocupación que se autoriza, superficie mínima libre de construcción, superficie máxima de desplante, altura máxima, lote mínimo, metros cuadrados con frente mínimo, nombre y firma del servidor público que expidió el documento.
5. Normas para el aprovechamiento del suelo, en el que se testó la clave, coeficiente de ocupación de suelo, superficie máxima y mínima de construcción que se autoriza, lote mínimo en subdivisiones, frente mínimo en subdivisiones, cajones de estacionamiento, firma de servidora pública que emitió el documento.
6. Registro de Fuente Fija Contaminante, en el que se testó domicilio, clave catastral, RFC firma de servidor público que expidió el mismo.
7. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil, en el que se testó el RFC y nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
8. Contrato de arrendamiento, en el que se testó el nombre del arrendador y del arrendatario, la superficie del inmueble, nombre de notario público, número de cuenta bancaria del arrendador, y firmas de los que intervinieron.
9. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
10. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de serie, suministro, subtotal y total pagado, número de cuenta y código QR.
11. Cédula de Identificación Fiscal, en la que se testó código QR, RFC, nombre, denominación o razón social, lugar y fecha de emisión, correo electrónico número telefónico.
12. Licencia de funcionamiento 00468A, en la que se testó la clave catastral, RFC, número de registro municipal, contrato de agua.
13. Carta poder para obtener el refrendo de Ecología, Protección Civil, Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento, todos del ejercicio 2023, en el que se testó domicilio del local y nombre de quien se le otorga el poder, firmas del otorgante y de quien recibe el poder.
14. Contrato de Sociedad, en el que se testó el nombre del Notario Público y de las personas que integraran la sociedad, así como el nombre de la sociedad y su abreviatura y se dejó visible los datos como el valor de las acciones.
15. Boleta de inscripción ente el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Otumba, en el que se testó el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.

X) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SORIANA.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00437/LF/23, en la que se testó el RFC de empresa, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, registro municipal, folio de la licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, folio de registro de fuente fija contaminante, licencia de anuncio publicitario y folio del dictamen de medidas de seguridad
2. Licencia de Uso de Suelo, en el que se testó el número de licencia, nombre del solicitante, solicitud, superficie construida, superficie total del predio, clave, superficie mínima libre de construcción, superficie máxima de construcción que se autoriza, lotes mínimos, niveles y frente mínimo, nombre de representante legal de arrendadora, nombre y firma de la autoridad que expidió el documento.
3. Croquis de ubicación y restricciones.
4. Registro de Fuente Fija Contaminante, en el que se testó clave catastral, RFC, aforo y firma de servidor público que expidió el mismo.
5. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testo Código Postal y RFC., nombre y firma de servidor público que expidió el documento.
6. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de serie, suministro, subtotal y total pagado, número de cuenta y código QR.
7. Contrato de arrendamiento, en el que se testó el nombre del arrendador y del arrendatario, la superficie del inmueble, nombre de notario público, número de cuenta bancaria del arrendador, RFC, y firmas de los que intervinieron.
8. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
9. Cédula de Identificación Fiscal, en la que se testó código QR, RFC, nombre, denominación o razón social, lugar y fecha de emisión, correo electrónico número telefónico.
10. Carta poder para obtener el refrendo de Ecología, Protección Civil, Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento, todos del ejercicio 2023, en el que se testó domicilio del local y nombre de quien se le otorga el poder, firmas del otorgante y de quien recibe el poder.
11. Contrato de Sociedad, en el que se testó el nombre del Notario Público y de las personas que integraran la sociedad, así como el nombre de la sociedad y su abreviatura y se dejó visible los datos como el valor de las acciones.
12. Boleta de inscripción ente el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Otumba, en el que se testó el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
13. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad, en el que se testó el nombre del representante legal y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
14. Cumplimiento de normatividad vigente en el que se testo nombre del representante legal, asunto, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
15. Oficio en el que se testó el número, mediante el cual se da a conocer el croquis de localización y restricciones, número de clave de industria contaminante, número de recibo de pago expedido por la Tesorería Municipal, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
16. Aviso de Funcionamiento, de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja, en el que se testo homoclave de formato, uso exclusivo, RFC, CURP, nombre, lada, teléfono.

XI) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CEMENTO Y MORTERO DE MEXICO SIGLO XXI.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 000736/LF/23, en la que se testó número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, licencia de anuncio publicitario y nombre y firma de servidor público que emitió el documento.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó la superficie construida, superficie total del inmueble, superficie del establecimiento, clave catastral, nombre y firma del apoderado legal y del servidor púbico que autorizó.
3. Licencia de Funcionamiento 000736A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal, firma y nombre de servidor público que emitió el documento.
4. Contrato de Compraventa, en el que se testó datos como los nombres y firmas del vendedor y comprador, Nombre del Notario Público y se dejó visible el nombre de persona física y régimen de la sociedad conyugal, Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento.
5. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
6. Recibo Oficial de pago ante el Organismo de Agua, en el que se testó el número de serie, suministro, subtotal y total pagado, número de cuenta y código QR.
7. Cédula de Identificación Fiscal, en la que se testó código QR, RFC, nombre, denominación o razón social, lugar y fecha de emisión.
8. Carta poder para obtener la Licencia de Funcionamiento, en el que se testó nombre de quien se le otorga el poder, firmas del otorgante y de quien recibe el poder.
9. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó RFC., nombre y firma de servidor público que expidió el documento.
10. Licencia de Uso de Suelo, en el que se testó superficie construida, superficie total del predio, clave catastral, superficie mínima libre de construcción, superficie máxima de construcción que se autoriza, lotes mínimos, frente mínimo, altura máxima, nombre y firma de la autoridad que expidió el documento.
11. Fotografías del comercio.
12. Croquis de ubicación.

XI) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BODEGA AURRERA CHICOLOAPAN.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 000353/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, licencia de anuncio publicitario, folio de dictamen de medidas de seguridad, licencia de uso de suelo, registro de fuente fija contaminante y nombre y firma de servidor público que emitió el documento.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, teléfono, clave catastral, contrato de agua, nombre y firma del apoderado legal.
3. Licencia de Uso de Suelo, en el que se testó superficie total del predio, clave catastral, expediente, lotes mínimos, altura máxima, clave, frente mínimo, número de factura, nombre y firma de la autoridad que expidió el documento.
4. Escritura en la que se hace constar la transformación de la razón social, en la que se testó el nombre del notario público, nombre de particulares y se dejó visible la nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, domicilio y firmas.
5. Poderes generales otorgados para representar a la empresa, en la que se testaron el nombre del notario, nombre de las personas a las que se les otorga el poder, CURP, número de credencial para votar y firma del Notario Público.
6. Pasaporte en el que se dejaron visibles los datos como lugar y fecha de nacimiento y sexo.
7. Escritos emitidos por el representante legal de la empresa y dirigido a la Dirección de Protección Civil, en el que se testó el número de recepción.
8. Ficha de registro y seguimiento de oficina de normatividad, en el que se testa el RFC, niveles de construcción,, nombre, teléfono y correo electrónico del representante legal, nombre y firma de servidor público que autorizó.
9. Contrato de arrendamiento, en el que se testa el nombre del representante legal de la empresa y del arrendador, superficie y domicilio, número de boletas prediales, importe de la renta, firma de las partes involucradas y se deja visible el régimen de la sociedad conyugal.
10. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó RFC., niveles de construcción, nombre y firma de servidor público que expidió el documento.
11. Fotografías del comercio.
12. Licencia de Funcionamiento 000353A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, número de registro municipal, contrato de agua.
13. Manifestación de valor catastral, en el que se testó los datos como son superficie de terreno, valor por metro cuadrado, valor del terreno propio.
14. Registro de Fuente Fija Contaminante, en el que se testo clave catastral, RFC, nombre y firma de servidor público que autorizó.

XII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO JARDINES DE ORIENTE S.A DE C.V.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 0009A/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, licencia de anuncio publicitario, licencia de uso de suelo, registro de fuente fija contaminante.
2. Licencia de Funcionamiento 0009A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento y contrato de agua.
3. Recibo de pago, en el que se testó el número de serie, RFC receptor, folio fiscal, número de certificado del CSD, número de certificado SAT, importe y subtotal, número de cuenta, valor unitario e importe.
4. Registro de Fuente Fija Contaminante, en el que se testo clave catastral, RFC, nombre y firma de servidor público que autorizó.
5. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó RFC. y firma de servidor público que expidió el documento.
6. Dictamen de cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil, en el que se testó RFC, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
7. Fotografías del inmueble.
8. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC.
9. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, teléfono, clave catastral, contrato de agua, superficie construida, nombre y firma del apoderado legal.
10. Contrato de compra venta, en el que se testa el nombre del vendedor y comprador y sus firmas y se deja visible el importe de la venta.
11. Solicitud para expedir copias certificadas en el que se testa el nombre del solicitante y clave catastral.
12. Copia de la sentencia y del auto dictado en el expediente 1558/93, relativo a la inmatriculación, en el que se testó nombre y firma del servidor público (juez).
13. Certificación de no adeudo fiscal, en el que se testó el nombre de quien solicitó, clave catastral, cuenta predial, nombre o razón social del propietario o poseedor.
14. Acta de Defunción en la que se testó el nombre del finado y edad, nombres de padre y madre, nombre del declarante, nombres de testigos, y se dejó visible el domicilio, estado civil y nacionalidad de la persona finada, fecha y hora de defunción, causa de muerte, edad, ocupación, nacionalidad, domicilio y parentesco de los testigos.
15. Oficio dirigido por el Notario Público al Director de Archivo Judicial, en el que se testó el nombre y firma de notario público, nombre del difunto, y nombre de los padres, y se dejó visible la fecha de fallecimiento, fecha de nacimiento.
16. Oficio de respuesta del Jefe de Archivo General de Notarias al Notario Público, en el que se testó el nombre del Notario Público y nombre y firma del servidor público que emite el documento.
17. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
18. Testimonio de la Constitución de la Sociedad, en la que se testó el nombre de los que integran la sociedad, nombre del secretario de juzgado, nombre de notario público y se dejó visible el capital de la sociedad.
19. Poder general otorgado para representar a la empresa, en la que se testó el nombre y firma de las personas a las que se les otorga el poder.
20. Cédula profesional, en la que se testó el nombre, firma, fotografía y serie.
21. Oficio en el que el ISEM, hace constar que tiene conocimiento de la apertura del establecimiento, en el que se testó el teléfono.

XIII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FIX FERRETERIAS.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00256/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie de la Unidad Económica, nombre y firma de servidor público que expide el documento.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, teléfono, clave catastral, contrato de agua, nombre y firma del apoderado legal.
3. Fotografías del inmueble.
4. Testimonio de la Constitución de la Sociedad, en la que se testó el nombre de los que integran la sociedad, nombre del Notario público y se dejó visible el capital de la sociedad.
5. Licencia de Funcionamiento 00256A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento y nombre y firma de servidor público que expidió el documento.
6. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
7. Recibo Oficial de Pago de agua, en el que se testó lo referente a la liquidación, cuenta y código QR.
8. Contrato de Arrendamiento, en el que se testo el nombre y firma de las partes, nombre del notario público y se dejó visible el monto de renta.
9. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR y RFC.
10. Instrumento notarial de la formalización del cambio de denominación y reforma a los estatutos sociales de la empresa en la que se testó la clave única del documento, nombre y firma del solicitante, nombre de notario público.
11. Boleta de Inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio el Distrito Federal, en el que se testó los datos del fedatario público, número de documento, características de autenticidad de la firma, número de boleta de pago y responsable de la oficina.
12. Poder general otorgado para representar a la empresa, en la que se testó el nombre y firma de las personas a las que se les otorga el poder.
13. Dictamen de Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testó el RFC y nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
14. Croquis de localización.
15. Protocolización de Acta de Asamblea, en el que se testó el nombre del Notario Público, nombre de la persona que solicitó la protocolización, valor de las acciones.
16. Recibo de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el que se testó el número de entrada, número de inscripción, línea de captura, nombre y firma del servidor público que expidió el documento.
17. Cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó RFC. y firma de servidor público que expidió el documento.

XIV) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FUNDACION BEST.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00281/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, registro Municipal, licencia de uso de suelo, registro de fuente fija contaminante, dictamen de medidas de seguridad.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, teléfono, superficie del establecimiento y superficie construida, clave catastral, superficie total del inmueble, nombre y firma del apoderado legal.
3. Cédula informativa de zonificación en el que se testó el expediente, superficie construida y total del predio, medidas del terreno neto y bruto, altura máxima de construcción, veces la superficie del predio, superficie mínima neta por lote, frente mínimo, número de factura de pago, nombre y firma del servidor público que expidió el documento.
4. Recibo Oficial de Pago de agua, en el que se testó lo referente a la liquidación, cuenta y código QR.
5. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
6. Testimonio del poder general para pleitos y cobranzas y actos administrativos limitados, en el que se testó el nombre de la persona a la que se le otorga el poder, el nombre y firma de notario público y se dejó visible el RFC de la persona a la que le otorgan el poder.
7. Registro del Aviso de otorgamiento de poder notarial, en el que se testó la clave de registro, número de escritura, fecha de escritura, volumen o tomo, libro, fecha de registro, nombre y CURP de Notario Público, número de notaría, tipo de actuación, entidad federativa.
8. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC y folios.
9. Pasaporte en el que se dejó visible el lugar de nacimiento y nacionalidad.
10. Escritura de constitución de la asociación, en la que se testaron datos de las personas que intervinieron en ella, nombre y firma del notario público.
11. Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el que se testó el nombre del solicitante y nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
12. Licencia de Funcionamiento 00278A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal y contrato de agua.
13. Aviso notarial de la constitución de una persona moral, en el que se testó el número de escritura y expediente y el nombre y firma del notario público.
14. Contrato de comodato, en el que se testa nombre del representante legal y apoderada legal, número de escritura pública, nombre de notario público, RFC de empresa, nombre y firma del comodante y comodatario.
15. Registro de fuente fija contaminante en el que se testa clave catastral, RFC, nombre y firma de servidor público que emitió documento.
16. Aviso de Funcionamiento de Responsable Sanitario y de Modificación o Baja, en el que se testó homoclave de formato, número de ingreso, RFC, Nombres, lada, teléfono, extensión y correo electrónico de la empresa, y del propietario.
17. Fotografías del inmueble.

XV) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA FARMACIAS DEL AHORRO AV.JUAREZ.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00260/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, licencia de uso de suelo, registro de fuente fija contaminante, licencia de anuncio publicitario.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó teléfono, superficie del establecimiento y superficie construida, clave catastral, nombre y firma del apoderado legal.
3. Cédula profesional en la que se testo número, código de barras, fotografía, firma y se dejó visible el CURP.
4. Acta de protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en el que se testó el nombre del notario público y se dejó visible fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión, domicilio y CURP del compareciente.
5. Recibo Oficial de Pago de agua, en el que se testó lo referente a la liquidación, cuenta y código QR.
6. Contrato de Arrendamiento de la Empresa y el Arrendador del inmueble en el que se testó los datos como el nombre de apoderado legal y arrendador, RFC de empresa, clave catastral, Nombre de notario público, nombre del banco y número de cuenta del arrendatario.
7. Licencia de Funcionamiento 00260A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal y contrato de agua.
8. Dictamen de cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó el RFC de la empresa, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
9. Registro de Fuente Fija de Contaminante en la que se testó la clave catastral RFC, así como nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
10. Cédula informativa de zonificación en el que se testó el número de CIZ y expediente, nombre y firma del servidor público que expidió el documento.
11. Croquis de localización.
12. Fotografías del inmueble.
13. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC y correo electrónico.
14. Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testo el RFC y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
15. Registro de Fuente Fija de Contaminante, en el que se testó el RFC, clave catastral, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.

XVI) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EL REFLEJO.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00364/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, contrato de servicio de agua, Registro Municipal, registro de fuente fija contaminante, dictamen de medidas de seguridad.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, superficie construida, clave catastral, nombre y firma del apoderado legal.
3. Licencia de Funcionamiento 00346A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal y contrato de agua, nombre y firma de servidor público que emitió el documento.
4. Contrato de Arrendamiento de la Empresa y el Arrendador del inmueble en el que se testó los datos como el nombre de apoderado legal y arrendador, RFC de empresa, clave catastral, Nombre de notario público, nombre del banco y número de cuenta del arrendatario.
5. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
6. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC, lugar y fecha de emisión, correo electrónico y número.
7. Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testo el RFC y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
8. Normas para el aprovechamiento de uso de suelo, en el que se testó el nombre de la persona solicitante, fecha de expedición, número de oficio, expediente, superficie total de construcción, coeficiente de ocupación de suelo, lote mínimo en subdivisiones, frente mínimo en subdivisiones, cajones de estacionamiento.
9. Croquis de localización.
10. Recibo de pago en el que se dejó visible el nombre de la persona física albacea de la sucesión testamentaria y se testó el importe y nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
11. Registro de Fuente Fija de Contaminante en la que se testó la clave catastral y RFC.
12. Dictamen Único de Factibilidad, en el que se testo la Superficie Total, Superficie construida, superficie en uso y número de dictamen.
13. Fotografías del inmueble.

XVII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXPO AZULEJOS.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00368/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, licencia de anuncio publicitario, Registro Municipal, registro de fuente fija contaminante, dictamen de medidas de seguridad.
2. Fotografías del inmueble.
3. Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testo el RFC y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
4. Licencia de Funcionamiento 00368A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal y contrato de agua.
5. Contrato de Arrendamiento de la Empresa y el Arrendador del inmueble en el que se testó los datos como el nombre de apoderado legal y arrendador, RFC de empresa, clave catastral, nombre de notario público, y se dejó visible el monto de la renta.
6. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
7. Recibo Oficial de Pago de agua, en el que se testó lo referente a la liquidación, cuenta y código QR.
8. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC, correo electrónico y teléfono lada y número.
9. Poder Amplio para llevar a cabo trámites de refrendo de Ecología, Protección Civil, Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento, en el que se testó el nombre de la persona que otorga y acepta el poder, así como de los testigos y firma de todos.
10. Boleta de Inscripción en el que no se distinguen los datos testados.
11. Licencia de Uso de Suelo, en la que se testan los datos referentes al expediente, clave catastral, superficie máxima y nombre y firma del servidor público que expide el documento.
12. Registro de Fuente Fija de Contaminante en la que se testó la clave catastral, RFC y número de factura oficial.

XVIII) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NACIONAL MONTE DE PIEDAD.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00465/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, Registro Municipal, registro de fuente fija contaminante, dictamen de medidas de seguridad, licencia de uso de suelo.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó RFC, teléfono, superficie construida, superficie total del inmueble, clave catastral, nombre y firma del apoderado legal.
3. Licencia de Funcionamiento de Anuncios Publicitarios en el que se testó el número de Registro Municipal, medidas y vigencia.
4. INE, en la que se dejaron visibles los datos de año de registro, sección, vigencia y sexo.
5. Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testo el RFC y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
6. Licencia de Uso de Suelo en la que se testó las superficies construida, del predio y pos construir, expediente y clave catastral, superficie máxima de ocupación autorizada, superficie máxima de desplante, frente mínimo, lote mínimo, número de licencia, altura máxima, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
7. Fotografías del anuncio publicitario y del inmueble.
8. Testimonio del Instrumento de los poderes que otorga la empresa a favor de personas las cuales se testaron los nombres, junto al del Notario Público, así como el de la integración del Patronato.
9. Croquis de localización.
10. Fotografías del inmueble.
11. Registro Municipal.
12. Dictamen Único de Factibilidad en el que se testó la superficie total, superficie construida y superficie en uso y número de dictamen.
13. Registro de Fuente Fija de Contaminante en la que se testó la clave catastral, RFC, número de factura oficial, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.

XIX) Archivo de nombre “LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIALIZADORA FARMACIAS DEL AHORRO.pdf” el cual contiene lo siguiente:

1. Licencia de funcionamiento 00261/LF/23, en la que se testó RFC de empresa, número de identificación, clave catastral, superficie, superficie construida, superficie de la Unidad Económica, licencia de uso de suelo, registro de fuente fija contaminante, licencia de anuncio publicitario.
2. Solicitud de trámite de Licencia de funcionamiento en la que se testó teléfono, superficie del establecimiento y superficie construida, clave catastral, nombre y firma del apoderado legal.
3. Cédula profesional en la que se testo número, código de barras, fotografía, firma y se dejó visible el CURP.
4. Acta de protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en el que se testó el nombre del notario público y se dejó visible fecha y lugar de nacimiento, estado civil, profesión, domicilio y CURP del compareciente.
5. Boleta de inscripción ante el registro público de la propiedad y del comercio de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en la que se testó el número de folio mercantil, boleta de pago y no se de los demás datos no se distingue a que pertenecen.
6. Recibo Oficial de Pago de agua, en el que se testó lo referente a la liquidación, cuenta y código QR.
7. Licencia de Funcionamiento 00261A del 2022, en la que se testó la clave catastral, RFC, superficie total del inmueble, superficie construida, superficie de establecimiento, número de registro municipal y contrato de agua.
8. Registro de Fuente Fija de Contaminante en la que se testó la clave catastral RFC, así como nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
9. Dictamen de cumplimiento de medidas preventivas de seguridad en materia de protección civil en el que se testó el RFC de la empresa, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
10. Croquis de localización.
11. Fotografías del inmueble.
12. Memoria descriptiva de anuncios.
13. Cédula informativa de zonificación en el que se testó el número de CIZ y expediente, nombre y firma del servidor público que expidió el documento.
14. Cédula de Identificación Fiscal en el que se testó código QR, RFC y correo electrónico.
15. Cumplimiento de Medidas Preventivas de Seguridad en Materia de Protección Civil, en el que se testo el RFC y el nombre y firma del servidor público que emitió el documento.
16. Registro de Fuente Fija de Contaminante, en el que se testó el RFC, clave catastral, nombre y firma del servidor público que emitió el documento.

**d) Vista de Informes Justificados.** En fecha siete de octubre de dos mil veinticuatro, se notificó a través del SAIMEX, el acuerdo mediante el cual se puso a la vista del Particular el Informe Justificado y el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, proveído por el cual se le otorgó a este último, un término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, a fin de emitir las manifestaciones que conforme a sus intereses convinieran.

Respecto a las licencias de funcionamiento entregadas, y de los documentos que las acompañan, no se pusieron a la vista del particular, al advertir que dentro de ellos, se dejaron visibles datos de naturaleza confidencial.

**No obstante, lo anterior, transcurrido el término de ley, el Recurrente fue omiso en emitir pronunciamiento alguno que conviniera a sus intereses, respecto al Informe Justificado.**

**e) Ampliación de plazo para resolver.** El siete de octubre de dos mil veinticuatro, el Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 181, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acordó ampliar por un periodo de razonable el plazo para resolver el Recurso de Revisión que nos ocupa; acto que fue notificado a las partes, el mismo día, mes y año, mediante el SAIMEX.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. **Complejidad del asunto:** La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. **Actividad Procesal del interesado:** Acciones u omisiones del interesado.
3. **Conducta de la Autoridad:** Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
4. **La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso:** Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “**TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO**.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO**.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“**PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**e) Cierre de instrucción.** El catorce de octubre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes, el mismo día, mediante el SAIMEX.

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO**. **Competencia**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 37 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO**. **Causales de improcedencia y sobreseimiento**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “**IMPROCEDENCIA**.” **(Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262),** el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

En el presente caso, no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que: el recurso fue presentado dentro del plazo establecido en el artículo 178 de la Ley la materia; además, que este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

El artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza algún supuesto de sobreseimiento; lo anterior, en virtud de que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que el Recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna causal de improcedencia, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, haya quedado sin materia.

En ese orden de ideas, toda vez que no ha quedado por completo sin materia el Recurso de Revisión, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto.

**TERCERO. Determinación de la Controversia**

Una vez realizado el estudio de las constancias que obran en el expediente electrónico en el que se actúa, se advierte que el Solicitante requirió los expedientes relacionados al permiso de funcionamiento comercial, de todos los comercios que se encuentran ubicados en el tramo de la carretera México-Texcoco, que forman parte del Municipio de Chicoloapan.

En respuesta, el Sujeto Obligado, señaló a través de la Dirección de Desarrollo Económico, que derivado de una búsqueda exhaustiva en su archivo, a la fecha no se encontró registro de expedientes de funcionamiento comercial del ejercicio fiscal 2024, por encontrarse dentro del período para Refrendar las Licencias de Funcionamiento. Ante dicha circunstancia, el Particular interpuso el presente Recurso de Revisión, cuyo agravio consiste en señalar que el Sujeto Obligado no entregó la información solicitada, hecho que actualiza la causal de procedencia prevista en la fracción II, del artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así las cosas, una vez admitido y notificado a las partes el Medio de Impugnación, el Sujeto Obligado modificó su respuesta y remitió los expedientes y licencias de funcionamiento que solicitó el particular; por su parte, el Recurrente fue omiso en realizar manifestaciones o alegatos que en derecho corresponden.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente de referencia, materia de la presente Resolución, consistentes en: la solicitud de acceso a la información; la respuesta del Sujeto Obligado; el escrito recursal y el Informe Justificado proporcionado por el Sujeto Obligado; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública**

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

**QUINTO. Estudio de Fondo**

Expuesta la controversia, se procede al análisis de los agravios hechos valer por el Recurrente, referentes a que no se le entregó lo solicitado, todo vez que el Sujeto Obligado, señaló que no contaba con la información solicitada, al no haberla generado. Precisado lo anterior, es de recordar que el Recurrente solicitó los expedientes relacionados al permiso de funcionamiento comercial, de todos los comercios que se encuentran ubicados en el tramo de la carretera México-Texcoco, que forman parte del Municipio de Chicoloapan.

En este sentido, es importante referir que lo solicitado forma parte de las obligaciones comunes de los sujetos obligados de acuerdo a lo señalado en el artículo 92, fracción XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que se transcribe a continuación:

*Capítulo II*

*De las Obligaciones de Transparencia Comunes*

*Artículo 92. Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*I al XXXI…*

*XXXII. Las concesiones, contratos, convenios,* ***permisos, licencias o autorizaciones otorgados****, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;*

*XXII a XLII…*

Así entonces, lo solicitado se trata de una obligación de transparencia que todos los sujetos obligados deben de cumplir, entre ellos, el Ayuntamiento de Chicoloapan. Ahora bien, respecto al tema, Eduardo López Sosa, Natalia López Sosa. (2014). “Derecho Administrativo Mexicano”. (p. 262), establece que la autorización, **la licencia**, **o el permiso es el** **acto administrativo por medio de los cuales se otorga a un particular, por un órgano administrativo, la facultad o el derecho para realizar una actividad o para hacer alguna cosa**.

Sobre dichos documentos, el artículo 31, fracciones, XXIV Quáter y XLIV, de la Ley Orgánica Municipal el Estado de México, establece que los Ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Chicoloapan, son los encargados de otorgar licencias para el funcionamiento de unidades económicas; así como, de crear el Registro Municipal de Unidades Económicas, donde se especifique la licencia de funcionamiento y las características que se determinen convenientes.

Para lograr lo anterior, los Ayuntamientos contarán con un Director de Desarrollo Económico o equivalente que impulsa la simplificación de trámites y reducción de plazos para el otorgamiento de **permisos,** **licencias** y autorizaciones del orden municipal, así como de operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los permisos o licencias de funcionamiento otorgadas, de conformidad con el artículo 96 Quáter de la Ley señalada en el párrafo anterior.

En ese sentido, en el artículo 2°, fracciones XV y XXXVIII, 5°, fracción X, 7°, fracción V, 15, 16 y 33 de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la **licencia de funcionamiento,** es el acto administrativo emitido por **los Municipios, a través de la Ventanilla Única, a través del cual se autoriza a una persona física o jurídica colectiva a desarrollar actividades económicas, mismas que son el conjunto de acciones y recursos que emplean las unidades económicas para producir bienes o proporcionar servicios.**

Por su parte, el artículo 2°, fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV, del ordenamiento jurídico, antes citado, establece tres tipos de unidades económicas, a saber, las siguientes:

* **Bajo impacto:** A las autorizadas para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado y no sean de consumo inmediato, así como, las que no estén en supuestos subsecuentes. (unidades económicas en donde se desarrollen actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación de servicios comerciales y que no sean considerados de mediano o alto impacto)
* **Mediano impacto:** A las que se les permite la venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato, siendo otra su actividad principal. (salones de fiesta, jardines, estacionamientos, lavado de autos o bodegas, restaurantes, hoteles, teatros y auditorios, salas de cine, clubes privados).
* **Alto Impacto:** Aquellas que tienen como actividad principal, la venta de bebidas alcohólicas para consumo inmediato y las que requieran dictamen único de factibilidad. (Bares, cantinas y salones de baile, discotecas y video bares con pista de baile, pulquerías, centros nocturnos, bailes públicos, centros botaneros y cerveceros y Restaurantes-bar)

En ese contexto, la operación de la **Ventanilla Única** y la expedición de las **licencias de funcionamiento**, le corresponde a los Ayuntamientos, al coordinar la gestión de trámites para la recepción, integración y verificación de los expedientes que presentan los particulares; por tales circunstancias, cada Municipio deberá apegarse a las disposiciones legales que emita, ello conforme a los artículos 16 y 22, fracción I, del Reglamento de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México.

En ese sentido, resulta necesario traer a colación el Bando Municipal de Chicoloapan 2024, que establece en sus artículos 52, inciso A), fracción XIV y 157, que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas el Ayuntamiento se auxiliará de diversas dependencias administrativas, entre ellas, la Dirección de Desarrollo Económico, que entre sus atribuciones se encuentra la de expedir licencias de funcionamiento, de establecimientos fijos comerciales, industriales y de servicios.

Por otra parte, el artículo 164 del Bando Municipal citado con anterioridad, señala que para que se otorgue la licencia o refrendo, los interesados deberán cumplir los requisitos siguientes:

1. Tramitar en un plazo no mayor a treinta días naturales su licencia de funcionamiento a partir del inicio de operaciones;
2. Acreditar que los locales destinados a la actividad se encuentren al corriente en el pago del impuesto predial y derechos por suministro de agua, debiendo exhibir las constancias de no adeudo que emite la autoridad fiscal y que cuentan con las instalaciones de higiene, seguridad y protección civil para las personas;
3. Las personas jurídicas colectivas deberán acreditar su constitución y la personalidad jurídica del representante;
4. Señalar domicilio dentro del territorio del municipio para todos los efectos legales que correspondan;
5. Presentar su Registro Federal de Contribuyentes;
6. Constancia de fuente fija contaminante expedida por la Coordinación de Ecología;
7. Licencia de uso de suelo o cédula de zonificación, según corresponda, expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal;
8. Las demás que señale la normatividad aplicable.

Así, se colige por una parte, que la pretensión de la ahora Recurrente, es obtener no solo la licencia de funcionamiento y/o permiso comercial, sino que además requiere el expediente formado con motivo de la expedición de la licencia, en este sentido, derivado de lo anterior, se integra de los documentos que dan cuenta del cumplimiento a los requisitos que deben acreditar las personas físicas o morales, que solicitan la licencia de funcionamiento. En este sentido, se advierte, que el Sujeto Obligado, cuenta con competencia para conocer de la información solicitada, al contar con un trámite específico para emitir el documento referido a través de la Dirección de Desarrollo Económico.

En este contexto, el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Desarrollo Económico, mediante respuesta, señaló que derivado de una búsqueda exhaustiva en su archivo, a la fecha no se encontró registro de expedientes de funcionamiento comercial del ejercicio fiscal 2024, por encontrarse dentro del período para refrendar las Licencias de Funcionamiento, es decir, señaló no haber generado documentos referentes a las licencias durante el ejercicio dos mil veinticuatro. Sin embargo, el Recurrente solicitó aquellas licencias o permisos de funcionamiento de los comercios ubicados en el tramo de la carretera México-Texcoco, que forman parte del Municipio de Chicoloapan, es decir, comercios fijos.

Derivado de ello, en un acto posterior, el Ayuntamiento de Chicoloapan modificó su respuesta e hizo entrega en versión pública de 13 licencias de funcionamiento y sus respectivos expedientes, que contienen los documentos que dan cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 164 del Bando Municipal, información que acompañó con Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, de fecha veinte de marzo de dos mil veinticuatro, que mediante acuerdo CHIC/PM/CT/0005/2024, aprobó la clasificación de la información como confidencial de los datos contenidos en los documentos entregados. Es importante señalar, que dichas documentales no se pusieron a la vista de la persona Particular, ya que de un análisis, realizado por este Instituto, se advirtió que el Sujeto Obligado dejo visibles datos de naturaleza confidencial y testo datos de naturaleza pública.

En este sentido, resulta procedente analizar si dichos datos son públicos o privados; en principio, cabe mencionar que el artículo 6°, Apartado A), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Igualmente, el segundo párrafo del artículo 16 de dicho ordenamiento, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Acorde con lo anterior, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 116, dispone que se considera información confidencial la que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

En concordancia con lo previo, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales.

En ese orden de ideas, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

En este sentido, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física o jurídica colectiva identificada e identificable. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

Por lo cual, la confidencialidad de los datos personales, tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, cumplimiento de atribuciones, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

Ahora bien, cuando las personas tienen una relación comercial, laboral, de servicios, trámites o del tipo que sea, necesariamente por un tema de interés público, debe cederse un poco de privacidad, de tal forma que la gente en general pueda verificar el debido desempeño de los servidores públicos, la aplicación de la ley y el ejercicio de recursos públicos; sin embargo, esto obliga a un ejercicio de ponderación en donde únicamente se privilegie la publicidad de los datos esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la vida privada de las personas. Bajo ese contexto, se analizarán si los datos mencionados de manera enunciativa, son confidenciales o públicos.

* **Nombre de los titulares de licencias de funcionamiento**

**Persona física**

Al respecto, se considera que el nombre de una persona se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Sobre el tema, se tiene presente que este Instituto emitió el Criterio Relevante 01/18, de la Segunda Época de este Instituto, que establece que el nombre del titular de una licencia (persona física), como en el caso que nos ocupa, es información confidencial, cuando no involucra aprovechamiento de recursos públicos.

*“****Nombre del titular de una licencia que no involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, constituye un dato personal susceptible de clasificar como confidencial.*** *El artículo 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por su parte el artículo 6, apartado A, fracciones I y II, de dicho ordenamiento establece que toda información en posesión de los sujetos obligados es pública y sólo podrá limitarse de manera justificada por razones de interés público, seguridad nacional, y para proteger la vida privada y datos personales en los términos precisados por las Leyes reglamentarias. Ahora bien, el artículo 92, fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala que el nombre de los titulares de las licencias es un dato de carácter público, no obstante, para su aplicación, dicho numeral debe ser interpretado de manera armónica y sistemática con el ordenamiento reglamentario de la materia de transparencia y protección de datos personales, pues la intromisión a los datos personales de particulares únicamente se verá justificada cuando se involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 92, fracción XXXII, 122 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia referida en concordancia con lo establecido por los numerales 6 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la entidad. En ese sentido, el nombre de los titulares de licencias constituye un dato personal que debe ser tratado bajo los principios y términos de la ley reglamentaria de la materia, y para su publicidad se requerirá que la expedición de la licencia correspondiente involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, caso contrario se deberá clasificar como confidencial.”*

En el Criterio en cita, se argumenta que si bien el nombre de los titulares de las licencias es un dato de carácter público, en términos del artículo 70, fracción XXVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 92, fracción XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dicho precepto legal debe ser interpretado de manera armónica y sistemática, pues la intromisión a los datos personales de particulares únicamente se verá justificada cuando involucre el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos; por lo que constituye un dato personal, a menos que se actualice alguno de los supuestos previamente señalados.

En ese contexto, se considera que el nombre localizado en una licencia de funcionamiento, guarda cierto interés público, dado que cualquier actividad comercial, industrial o económica, es regulada por el Municipio de Chicoloapan dentro de su circunscripción territorial, pues ayuda a transparentar la gestión pública; además, tal como se estableció en párrafos anteriores, se refiere a los documentos que contienen la autorización por parte del Ayuntamiento de Chicoloapan, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, para que un particular pueda realizar una actividad económica, comercial o industrial, regulada por las Leyes respectivas.

En ese sentido, en las multicitadas obligaciones comunes de transparencia, el legislador contempló como información de interés público y que debe estar disponible para consulta, aquellas licencias otorgadas, especificando el nombre de su titular y las características principales; ello, con la finalidad de asegurar la mayor difusión, que permita a los ciudadanos evaluar de manera permanente los indicadores más importantes de la gestión pública, como lo son, la autorización de licencias de funcionamiento, pues es facultad exclusiva de los Municipios, ver las cuestiones relacionadas con el tema en cuestión. Además, se incluyó el deber para los sujetos obligados de proporcionar, en la medida de lo posible, esta información con valor agregado, a efecto de facilitar su uso, comprensión y permitir evaluar su calidad, confiabilidad, oportunidad y veracidad.

Toma sustento, dicha situación, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, segunda; relativo a la iniciativa que contiene el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de este se desprende que el Poder Legislativo consideró que una de las principales contribuciones que trajo dicha Ley, es el catálogo de las obligaciones de transparencia, a través de un listado amplio, completo, detallado y preciso para todos los sujetos obligados del país, que permitan garantizar, el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información.

Igualmente, se destacó que aún determinando causales de reserva en las leyes especiales diversas a la Ley General o las Estatales de Transparencia, todos los sujetos obligados deben de dar cumplimiento con todos los principios y procedimientos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con los recursos y criterios de la misma.

Bajo tal premisa, podría concluirse que la hipótesis normativa del artículo 92, fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y los Municipios, se traduce en una excepción a la información personal que debe ser protegida, tal como es en el caso que nos ocupa el nombre del titular persona física de una licencia de funcionamiento, por lo que no es dable, como se asienta en el Criterio Relevante, considerar que el nombre de los titulares estas, deba ser considerado confidencial, aún y cuando el mismo no involucre aprovechamiento de bienes o recursos públicos.

A mayor abundamiento se puede referir que, el artículo 91 de dicho ordenamiento jurídico, establece que la información pública será restringida excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial; por lo que, se colige que las obligaciones de transparencia no superan de forma automática la prohibición de no difundir datos personales sin el consentimiento de su titular, como sucede en el caso concreto.

Ante tales circunstancias, se desprende que, en el caso concreto, sobreviene una **colisión de derechos fundamentales**, esto es, por una parte, se tiene el derecho de acceso a la información del Particular para conocer el nombre de la persona a la cual se le otorgó una licencia para desarrollar determinada actividad, y por la otra, el derecho a la protección de los nombres de aquellas a quienes obtuvieron una autorización específica, lo cual implica dar a conocer datos personales confidenciales consistentes, en el nombre de personas físicas y este vincularlo en la actividad que desarrollan y el lugar en el que se ubica su establecimiento.

Sobre el particular, debe señalarse que en un sistema jurídico racional, el contenido de ciertos derechos fundamentales no es absoluto y la colisión entre derechos fundamentales debe resolverse mediante una ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer en el caso concreto, y no apelando a reglas de prioridad entre normas.

Por cuanto hace a la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la vida privada, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la **necesidad de resolver el conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación; además, que el interés público que tenga cierta información, será concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad o la vida privada, en donde este derecho debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto**, tal y como se desprende de la tesis 1a. XLIII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 928, de marzo de 2010, Novena Época, materia constitucional.

En ese mismo sentido y atendiendo a la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, por analogía, este debe ceder cuando exista un interés público mayor de acuerdo a las circunstancias del caso. Precisado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime; para lo cual, el artículo 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el recurso de revisión, debe aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:

* **Idoneidad:** La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
* **Necesidad:** La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y
* **Proporcionalidad:** El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.

**a) Idoneidad.** Existe un fin constitucionalmente válido para dar a conocer el nombre de aquellas personas físicas a quienes les fue otorgada una licencia para realizar una actividad económica, comercial o industrial en el Municipio de Chicoloapan; dicho fin la rendición de cuentas sobre el quehacer gubernamental que permita identificar a aquellas personas que han sido autorizadas por el Ayuntamiento, para realizar actividades lícitas; esto es, las localizadas en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios, a efecto de determinar si la misma se realizó atendiendo a la normatividad aplicable.

Al respecto, es de señalar que la **transparencia** está orientada a maximizar el uso social de la información de los organismos gubernamentales, misma que sirve para exigir cuentas a las autoridades; mientras que la **rendición de cuentas** debe entenderse como la obligación de los funcionarios de responder por lo que hacen y la que atañe al poder de los ciudadanos para sancionar los resultados de la gestión en caso de que los servidores públicos hayan violado sus deberes públicos. Por lo que, estos dos conceptos están asociados de manera notable y por tanto, los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas.

En ese orden de ideas, la transparencia, al permitir y ayudar a la rendición de cuentas, funciona de doble manera, capacitadora, al permitir a la sociedad premiar o castigar el desempeño de los entes públicos, y cómo inhibidora de conductas y acciones que atenten contra el **interés público.**

Ahora bien, tal como se estableció en párrafos anteriores, cualquier actividad comercial, industrial o económica, únicamente podrá ser llevada a cabo, bajo el amparo de una licencia de funcionamiento expedida, en el presente caso, por el Ayuntamiento de Chicoloapan, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, su Reglamento, entre otras normatividades; en tal virtud, los nombres de las personas que tienen una autorización para poder realizar diversas unidades económicas, **se traduce en información que permite transparentar el otorgamiento por parte del Estado de dichos documentos a diversos particulares.**

En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el acceso a la información como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos, **para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se constituye como una exigencia social de todo Estado de Derecho, y como un derecho colectivo o garantía social,** a fin de lograr la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración pública. Lo anterior, a través de la jurisprudencia número P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, página 743, Novena Época, en junio de dos mil ocho.

A mayor precisión, la transparencia de la información requerida permitiría a la sociedad, en general, conocer los nombres de las personas que acreditaron los elementos necesarios para poder realizar una actividad económica dentro del territorio del Municipio; esto es, de los requisitos establecidos en las leyes respectivas.

En ese orden de ideas, resulta necesario precisar, que en el artículo 21, fracción III de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, **prevé que es obligación de los propietarios de establecimientos, tener en un lugar visible dentro de la unidad económica, el original o copia certificada de la licencia de funcionamiento.**

Por ende, otorgar el nombre de la persona autorizada, a través de una licencia de funcionamiento, permite corroborar que la exhibida en el establecimiento comercial, fue emitida efectivamente por la autoridad competente, en el presente caso, por el Ayuntamiento de Chicoloapan.

Bajo esa premisa, se entiende que la materia sobre la cual versa la presente solicitud, reviste un interés colectivo para la sociedad, dado que el Estado a nivel municipal, es el encargado de regular los establecimientos comerciales o industriales dentro de extensión territorial.

Así, mediante la difusión de los nombres de aquellas personas que cuentan con la licencia de funcionamiento, permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan aquellos que están autorizados por parte del Ente Recurrido para realizar actividades económicas, mismas que se encuentran reguladas, por lo que, con ello se garantizaría que la sociedad tenga certeza de que **las autorizaciones colocadas en los establecimientos, fueron efectivamente emitidas por el sujeto obligado, y no funcionan fuera del marco de la normatividad aplicable.**

Es bajo ese contexto, que se considera que el derecho de acceso a la información debe prevalecer frente a la protección del nombre de los titules de licencias de funcionamiento, pues resulta de interés público, el que la sociedad pueda identificar a quiénes están autorizados para ejercer la actividad comercial; lo cual permite corroborar que la localizada en el establecimiento fue efectivamente emitida por el Sujeto Obligado.

Igualmente, permitiría el escrutinio de la actividad de la autoridad encargada de emitir dichas licencias, en tanto que la sociedad podría advertir si se autorizaron a quienes cumplen con los requisitos establecidos la normatividad aplicable e incluso si dicha licencia se encuentra vigente.

**b) Necesidad.** El sacrifico de la protección del nombre de aquellas personas que se les otorgó una licencia de funcionamiento, como medio para lograr el fin constitucionalmente válido señalado previamente, se justifica en razón de que se satisface el interés mayor de los ciudadanos de conocer si los establecimientos comerciales cuentan con la autorización correspondiente. Además, corrobora si la localizada en el inmueble para llevar a cabo la actividad, fue emitida por el Sujeto Obligado, **como regulador de las actividades económicas del Municipio, además de que permite identificar a las personas que acceden al servicio quién es el responsable del local.**

Sobre el particular, el artículo 2° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que entre los objetivos de la misma, se encuentran: i) transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información generada por los Sujetos Obligados; ii) promover, fomentar y la cultura de la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas y, iii) propiciar la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.

En el caso concreto, se considera que no existe un medio menos oneroso que el ejercicio del derecho de acceso a la información para lograr el fin constitucionalmente válido, que es transparentar y rendir cuentas a la sociedad sobre las personas a quiénes se les otorgaron licencias, para que pudieran realizar actividades económicas, comerciales o industriales, pues sólo por esta vía se puede conocer la forma en la cual el ente recurrido ejerció sus facultades emanadas en los diversos ordenamientos jurídicos, lo cual permitiría comprobar que las licencias localizadas en los respectivos establecimientos cumplieron con los requisitos establecidos en los mismos.

En otras palabras, se considera que sólo con la difusión del nombre del titular de las licencias de funcionamiento, se podrían aportar los elementos necesarios a la ciudadanía para conocer que cualquier establecimiento comercial cuenta con la autorización emitida por el Ayuntamiento.

Es decir, si se negara el derecho de acceso a la información al nombre localizado en dicho documento, se impediría que los ciudadanos pudieran corroborar que las autorizaciones, que por Ley deben de estar visibles en los establecimientos, efectivamente fueron emitidas por el Sujeto Obligado, pues al proteger dicho dato no se tendría certeza de que el titular corresponda con el emitido por el Municipio en comento, además de que impediría conocer o identificar a la persona responsable del mismo, para atender asuntos relacionados con este, pues debe tener presente que la licencia de funcionamiento se entrega para brindar servicios a terceros, de ahí que se advierta un tema de interés público y que resulte imperativo la difusión de la información, advirtiéndose una desventaja de menor proporción en cuanto a la afectación de la protección de los datos personales.

**c) Proporcionalidad** **en sentido estricto.** El sacrificio de la protección al nombre de aquellas personas que se les otorgó una licencia para realizar actividades económicas, como medio para lograr el fin constitucionalmente válido señalado previamente, se justifica en razón de que se satisface el interés mayor de los ciudadanos de conocer si los comerciantes cuentan con la autorización correspondiente para llevar a cabo dichas actividades, las cuales son reguladas, específicamente por los Municipios del Estado de México.

Aunado a ello, se aportarían elementos para determinar si esas autorizaciones se emitieron conforme a derecho y que las que se encuentran visibles en los establecimientos fueron efectivamente emitidas por el Ayuntamiento, esto es, que se cumplen con los requisitos legales que marcan las disposiciones antes estudiadas.

Conforme a lo anterior, el bien jurídico tutelado por el supuesto de confidencialidad previsto en el artículo 143, fracción I de la Ley de la materia, debe ceder frente al derecho de la sociedad de obtener información, en tanto que es mayor el beneficio que representa su publicidad, pues la misma da cuenta del correcto actuar del Sujeto Obligado como regulador de las actividades comerciales en la extensión territorial del Municipio de Chicoloapan y permite a los usuarios del local comercial identificar al responsable del mismo.

**En ese sentido, la difusión del nombre de los titulares de las licencias de funcionamiento revisten un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar la emisión de dichas autorizaciones; en razón de que se trata de información generada con motivo del ejercicio de las funciones del Ente Recurrido, a través de la Dirección de Fomento y Desarrollo Económico, Administración y Reglamentos, como regulador de cualquier actividad económica, comercial o industrial dentro de su territorio**; lo anterior, conforme a la Ley Orgánica Municipal el Estado de México, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México y su Reglamento y el Bando Municipal de Chicoloapan.

Por todo lo expuesto, **dar a conocer el nombre de los titulares de licencias, prevalece sobre la protección de los datos personales confidenciales de dichas personas, en razón del interés público que reviste;** por lo que, no resulta aplicable, en el presente caso, el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Persona Jurídico-Colectiva**

Al respecto, se considera que la denominación o razón social de una persona moral, es pública, pues dichos datos se encuentran inscritos en el Registro Público del Comercio; lo anterior, toma sustento en el Criterio de interpretación, con clave de registro SO/008/2019, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que precisa lo siguiente:

*“****Razón social y RFC de personas morales.*** *La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio; asimismo, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores.”*

Lo anterior, se robustece con el hecho de que el Ente Recurrido tiene como obligación común de transparencia, poner a disposición del público las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, el cual debe incluir la razón social del titular, de conformidad con los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia –Lineamientos técnicos generales-, tal como se observa a continuación:





Por lo tanto, **no procede la clasificación del nombre de las personas morales localizadas en las licencias de funcionamiento**, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; situación que se robustece, con el hecho de que permite corroborar que la exhibida en el establecimiento comercial, fue emitida efectivamente por la autoridad competente y que su titular corresponde al establecimiento en cuestión.

* **Clave Catastral del inmueble autorizado en la licencia de funcionamiento, esto es, donde se encuentra el establecimiento comercial**

En principio, resulta necesario señalar que de conformidad con el artículo 179, fracción I, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se entiende por clave catastral, al código alfanumérico único e irrepetible y está compuesto de dieciséis caracteres, que se asigna para efectos de localización geográfica, identificación, inscripción, control y registro de los inmuebles; los diez primeros deben ser caracteres numéricos y los seis últimos pueden ser alfanuméricos; su integración corresponde invariablemente y en estricto orden, a esta estructura: los tres primeros identifican al código del municipio, las dos siguientes a la zona catastral, los tres que siguen a la manzana y los dos siguientes al número de lote o predio; cuando se trate de condominios, las siguientes dos posiciones identifican el edificio y las cuatro últimas el número de departamento, en los casos de propiedades individuales estos seis últimos caracteres se codifican con ceros.

Conforme a lo descrito, se advierte que el dato en comento hace referencia a un predio determinado, en el presente caso, **de un establecimiento comercial,** mismo que identifica el predio donde se realiza una actividad económica regulada por el Municipio, respecto del cual se expidió una licencia de funcionamiento.

En ese orden de ideas, conforme a la página oficial del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México, en su apartado de Preguntas Frecuentes (consultada en la liga electrónica <http://igecem.edomex.gob.mx/faqs> , el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, a las trece horas), para obtener la información registrada en el Padrón Catastral Municipal, conociendo **la clave catastral de un predio**, se necesita acreditar el interés jurídico o legítimo respecto del inmueble; esto es, demostrar la propiedad, posesión, herencia, trámite judicial, entre otros.

De tales circunstancias, se colige que conocer la clave catastral de un inmueble, permite conocer mayores datos del catastro, pues para acceder a la misma, se necesita acreditar el interés legítimo o jurídico.

En ese contexto, es dable afirmar que necesariamente la entrega de la clave catastral da cuenta del patrimonio de una persona específica; esto es, la expedición de la licencia de funcionamiento, está vinculada con la propiedad del inmueble autorizado, por lo que hacer pública la clave catastral permite acreditar que la ubicación del predio que tiene el establecimiento comercial.

Por lo tanto, la clave catastral localizada en una licencia de funcionamiento, es confidencial, pues si bien con dicho dato se acredita que el inmueble donde se realizan actividades económicas, industriales o comerciales, está debidamente registrado, también lo es que, que ayuda a identificar el domicilio particular o parte del patrimonio; por lo que, resulta procedente la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Registro Federal de Contribuyentes (RFC)**

**Persona física.**

Al respecto, cabe precisar que las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que están obligadas a expedir comprobantes fiscales, tienen que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, esta inscripción es realizada por el Servicio de Administración Tributaria, quien entrega una cédula de identificación fiscal en donde consta la clave que asigna este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo en comento, esta clave se compone de trece caracteres alfanuméricos, con datos obtenidos de los apellidos, nombre(s), fecha de nacimiento del titular, más una homoclave que establece el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, la clave del Registro Federal de Contribuyentes es el medio de control que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; mientras que los particulares tramitan dicho dato, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.

Conforme a lo expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, ya que hace a las personas físicas identificas e identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales. Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucrada, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Lo anterior, resulta congruente con el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

De tal suerte, el Registro Federal de Contribuyentes de los servidores públicos no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, por lo que constituye un dato personal confidencial al actualizar el supuesto normativo del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Persona Moral**

Al respecto, el Registro Federal de Contribuyentes, inicia con un preinscripción por Internet y se concluye en cualquier Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente, en donde aquellas personas que realicen el trámite tendrán que entregar ciertos documentos, que para las personas jurídico colectivas, serán, entre otros, la copia certificada del documento constitutivo debidamente protocolizado, comprobante de domicilio, identificación personal, número de folio asignado que se le proporcionó al realizar el envío de su preinscripción y copia certificada del poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal, o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o fedatario público.

Derivado del trámite se obtiene, entre otros, la **cédula de identificación fiscal o constancia de registro.**

Por ende, la información correspondiente al Registro Federal de Contribuyentes de una persona moral da cuenta del cumplimiento o no en sus obligaciones fiscales; por tanto, no se actualiza su clasificación como confidencial.

Además, resulta aplicable el Criterio 08/19 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que señala lo siguiente:

***“Razón social y RFC de personas morales.*** *La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas en el Registro Público de Comercio; asimismo, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores.”*

Dicho criterio, precisa que el Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, es público, al no referir a hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores. De tales circunstancias, el Registro Federal de Contribuyentes de personas morales, no actualizan la causal de clasificación, prevista en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al ser de naturaleza pública.

* **Superficie de establecimiento**

Se le llama superficie construida a la suma total de los metros cuadrados que están dentro del perímetro de una vivienda, es decir, la superficie construida es el área que está cubierta en un inmueble, es decir, que tiene un techo sobre sí misma y normalmente cuatro paredes a su alrededor. Por lo que, se considera información de interés público, puesto que atiende a la naturaleza del trámite a realizar y abona en la rendición de cuentas, pues con este dato se tiene la certeza y precisión del lugar exacto donde debe operar un establecimiento que cuenta con Licencia de Funcionamiento, además, no revela algún dato personal que identifique o haga identificable a alguien.

* **Firma del titular o representante legal**

Al respecto, es de señalar que la firma es considerada un dato personal, al tratarse de información gráfica a través de la cual su titular exterioriza su voluntad en actos públicos y privados; en el presente caso, dicho dato, es del representante legal o titular de la licencia o permiso de funcionamiento.

Además, en el presente caso, dicho dato es plasmado en las autorizaciones referidas, dado que con este se acredita que fue entregado por el Municipio al titular o representante legal de la empresa que realzará una actividad económica, comercial o industrial; por lo que, guarda cierto interés público dar a conocer la firma, dado que cualquier actividad, es regulada por el Ayuntamiento de Chicoloapan, dentro de su circunscripción territorial, pues ayuda a transparentar la gestión pública.

Además, otorgar la firma de la persona autorizada, a través de una licencia o permiso, permite corroborar que la exhibida en el establecimiento comercial, fue emitida efectivamente por la autoridad competente, en el presente caso, por el Ente Recurrido y **aceptada por el titular, al rubricarla.**

Así, mediante la difusión de las firmas de aquellas personas que cuentan con la licencia o permiso, permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan aquellos que están autorizados por parte del Municipio de Chicoloapan, para realizar actividades económicas, mismas que se encuentran reguladas, por lo que, con ello se garantizaría que la sociedad tenga certeza de que **las autorizaciones colocadas en los establecimientos fueron efectivamente emitidos por el Sujeto Obligado y aceptadas, por el Titular de estas, y no funcionan fuera de la Ley.**

Conforme a lo expuesto, se considera que la firma de los representantes legales o titulares, localizadas en las licencias de funcionamiento otorgadas por el Sujeto Obligado, no actualizan la causal de clasificación, establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Acta Constitutiva e instrumentos notariales**

Sobre este documento, se debe señalar que debe ser analizado en su integridad, al ser este un acto que emana de la libertad de las personas para asociarse, derecho humano, que es reconocido en el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, debe entenderse que las personas físicas pueden asociarse para crear personas morales, y con este acto dotarlas de personalidad jurídica.

Es necesario precisar que la Doctrina Jurídica, ha reconocido que las personas morales *son realidades orgánicas que nacen de un acto social constitutivo, en el que la voluntad de las partes se proyecta unilateralmente y crea un complejo de derechos y deberes de las partes entre si y de estas con la corporación y, sobre todo, crea la norma jurídica objetiva, es decir, los estatutos que constituyen la ley de la sociedad*., (Manuel García Rendón. (2016). Sociedades Mercantiles. Ciudad de México. Oxford. Pág. 18). De lo anterior, se puede inferir que las sociedades no nacen de un contrato ordinario, si no, de un contrato de organización.

No debe perderse de vista, que el contrato social de una sociedad mercantil está sujeto a diversas formalidades de entre las cuales destaca la prevista en el artículo 5°, primer párrafo de la Ley General de Sociedad Mercantiles, al señalar:

***“Artículo 5o****. Las sociedades se constituirán ante fedatario público y en la misma forma se harán constar con sus modificaciones. El fedatario público no autorizará la escritura o póliza cuando los estatutos o sus modificaciones contravengan lo dispuesto por esta Ley.”*

Asimismo, debe entenderse que la constitución de una sociedad mercantil emana de un acuerdo de voluntades de sus socios, del cual deriva un contrato social y que, a su vez, la Ley le establece formalidades.

Al respecto, dicho contrato social, también conocido como acta constitutiva, conforme al artículo 6° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se conforma de los siguientes datos:

1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad;
2. El objeto de la sociedad;
3. Su razón social o denominación;
4. Su duración, misma que podrá ser indefinida;
5. El importe del capital social;
6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización.
7. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije;
8. El domicilio de la sociedad;
9. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores;
10. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social;
11. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad;
12. El importe del fondo de reserva;
13. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y
14. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados anticipadamente.

En ese contexto, es necesario precisar que **la publicidad de información relativa a la constitución legal de una empresa proveedora del Estado, debe considerarse de interés público**, lo anterior es así, pues debe privilegiarse el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas; pues su publicidad radica en que permite a la ciudadanía conocer de manera clara y precisa, que una empresa que está obteniendo recursos públicos, se encuentra debidamente registrada y constituida; por lo que, se considera correcto que se haya entregado en versión pública, sin embargo, es necesario analizar si los datos testados actualizan la clasificación o no.

Sobre el tema, el artículo 116, último párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 143, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establecen que será información confidencial, aquella que presenten los particulares con dicho carácter.

Además, el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así́ como, para la Elaboración de Versiones Publicas, establece que la información susceptible a ser clasificada por dicha causal, es la siguiente:

* La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
* La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor; así como, aquella relativa a detalles sobre el manejo de una empresa, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones.

Conforme a dicha circunstancia, se logra observar que los únicos datos que son clasificables por dicha causal, son aquellos que den pauta del patrimonio de la persona moral y de los socios, pues corresponden al conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona moral y física, que constituyen una universalidad jurídica; por lo que, revelar dicha información se estaría vulnerando su privacidad, al ser el conjunto de bienes y activos con los que cuenta.

Así mismo, resultaría procedente la clasificación de los datos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo que de ventaja a un tercero; así como, aquellos que den detalles sobre el manejo de una empresa, el proceso de toma de decisiones o información que afecten sus negociaciones.

No obstante, por lo que, hace al nombre de los socios y sus datos de contacto, ubicación e identificación, no son susceptibles a ser clasificados en términos del artículo 143, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, pues son datos personales que los hacen identificables, por lo que, no entran en la categoría de la causal referida.

Sin embargo, este Instituto considera que los datos de identificación, contacto y ubicación de los socios, podrían actualizar la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de la materia, por lo que, es necesario analizar algunos de los datos que pudieran obran en dicha acta constitutiva.

* **Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de socios de empresa**

Al respecto, cabe precisar que las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que están obligadas a expedir comprobantes fiscales, tienen que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, esta inscripción es realizada por el Servicio de Administración Tributaria, quien entrega una cédula de identificación fiscal en donde consta la clave que asigna este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

De acuerdo a lo establecido en el artículo en comento, esta clave se compone de trece caracteres alfanuméricos, con datos obtenidos de los apellidos, nombre(s), fecha de nacimiento del titular, más una homoclave que establece el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria.

Ahora bien, la clave del Registro Federal de Contribuyentes, es el medio de control que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; mientras que los particulares tramitan dicho dato, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.

Conforme a lo expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, ya que hace a las personas físicas identificas e identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales. Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucrada, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.

Lo anterior, resulta congruente con el Criterio de Interpretación, con clave de control SO/019/2017, de la Segunda Época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

***“Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas.*** *El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

De tal suerte, el Registro Federal de Contribuyentes de los socios no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, por lo que constituye un dato personal confidencial al actualizar el supuesto normativo del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Domicilio**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas**, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.**

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas. Por lo tanto, se actualiza la clasificación, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nacionalidad o lugar de nacimiento**

Respecto a dicho dato, cabe precisar que es un atributo de la personalidad que señala al individuo como miembro de un Estado, es decir, es el vínculo legal que relaciona a una persona con un País determinado, por lo que, se trata de un dato confidencial, susceptible a su clasificación en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Edad**

Al respecto, este Instituto advierte que la edad es información referida a la esfera privada de los particulares, dado que la misma da cuenta de los años cumplidos, el nivel de madurez, las características físicas y de raciocinio de una persona, por lo que resulta procedente clasificar dicho dato en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Fecha de nacimiento**

La fecha de nacimiento es un dato personal, toda vez que consiste en información concerniente a una persona física identificada o identificable, toda vez que revela el día exacto en que nació, así como, la edad de la persona, que tal como se analizó previamente es clasificada, más aún cuando este dato se encuentra vinculado con el nombre de una persona en específico.

 Conforme a lo anterior, se colige que se trate de un dato concerniente a la vida privada de la persona, en virtud de que darlo a conocer se afectaría la intimidad de la misma; por lo tanto, es considerado un dato de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Estado civil**

El estado civil es un atributo de la personalidad, de acuerdo con el artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, e indica si las personas son solteras o casadas y sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil. Por lo que es un tema que tiene que ver con la vida privada, ya que, para acceder a un cargo público, el estado civil de las personas es irrelevante, ya que tener uno u otro no influye en el mejor o menor desempeño de un cargo público.

De esta manera, se trata de un dato personal confidencial que tiene que ver únicamente con la vida privada de las personas, motivo por el cual se considera un dato personal en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Teléfono y celular particular**

Al igual que el correo electrónico, el número asignado a un teléfono particular o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, ya sea a través de un dispositivo móvil o bien, en un lugar como el domicilio; por lo que, la titularidad del mismo, al igual que el correo electrónico analizado, corresponde a la persona física en su calidad de particular.

En tales consideraciones, dicho dato personal es susceptible de ser clasificado como confidencial, con fundamento en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que los datos de contacto, ubicación e identificación de los socios, son confidenciales, en términos del artículo referido en el párrafo anterior; finalmente, por lo que hace al nombre de los socios, es necesario referir lo siguiente:

* **Nombre de los socios**

El nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Sin embargo, en el presente caso, se trata de aquellas personas que decidieron crear una organización, con un objetivo común, por lo que, tienen derechos y obligaciones de la empresa; por lo que, este Instituto considera que dichos datos son de naturaleza públicas, pues a través de la relevación de su nombre, se logra observar que la empresa está debidamente integrada y no se trata de una organización fantasma.

Sumado a ello, permite identificar quienes son los dueños de la empresa y por lo tanto, que reciben los recursos públicos entregados por el Sujeto Obligado, de ahí que exista un interés público de dar a conocer el nombre de estos; pues aparte de todo, permite conocer que personas, son las que toman las decisiones, dentro de la empresa, tal como es participar en un procedimiento de adquisición, arrendamiento, contratación de servicios o realización de obra, dentro de una institución pública.

Por tal circunstancia, se considera que el nombre de los socios que conformaron una empresa y que es proveedor del Sujeto Obligado, guarda la naturaleza de pública y por lo tanto, no procede su clasificación, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Acta de Defunción**

El Registro Civil en términos del artículo 3.1 del Código Civil del Estado de México, señala que es la institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, **defunción**, y expedición de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, asimismo, inscribe las resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos que establezca su Reglamento.

En este sentido el artículo 3.29, señala que la defunción es la cesación completa y definitiva de los signos vitales de una persona física, que puede producirse de manera natural o de forma violenta. El acta de defunción contendrá:

1. Datos generales del finado.

2. Nombre de los padres del difunto, si se supieren;

3. La causa de la muerte;

4. El destino final del cadáver y en su caso, el número de la orden de inhumación o cremación.

5. Fecha, hora y lugar de la muerte y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta;

6. Nombre, número de cédula profesional, domicilio del médico que certifique la defunción y folio del certificado de defunción.

7. Datos generales del declarante.

Dada esta relevancia y que no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones de servidores públicos es que el contenido del Acta de Defunción debe ser clasificada en su totalidad, además que parte los datos que la integran hacen identificable a la persona sin tener que ver con el ejercicio de un cargo público. Pues como se ha señalado, el Acta de Defunción comprueba que una persona ha fallecido, sus causas, el horario, destino del cadáver, etc., información que tiene que ver con la vida privada.

De esta manera, se trata de un documento de naturaleza confidencial que tiene que ver únicamente con la vida privada de las personas, motivo por el cual se considera que actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Clave de registro o elector del representante legal**

Al respecto, este Instituto localizó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueban diversas disposiciones relativas a la forma y contenido de la Lista nominal de electores residentes en el extranjero, que se utilizará con motivo de la jornada electoral del primero de julio de dos mil doce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil doce, en el cual establece que la clave de elector, se conforma por las consonantes iniciales de los apellidos y el nombre del elector, seguido de su fecha de nacimiento (dos dígitos para el año, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día), número de la entidad federativa de nacimiento, letra que identifica el género y una homoclave compuesta de tres dígitos, dando un total de 18 caracteres.

Conforme a lo anterior, se puede advertir que, con la clave de elector, se podrían obtener indicios o datos completos de una persona, que la podría ser identificada e identificable, pues se podría inferir el nombre de la persona, así como, su fecha y entidad de nacimiento, los cuales son considerados de su vida privada.

Por lo tanto, al ser un dato que hace reconocible a una persona física, **resulta procedente su clasificación como información confidencial en términos de lo dispuesto por el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

* **Código Bidimensional o QR y Cadenas Originales y Sellos Digitales**

Sobre el tema, la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, precisa que la Constancia de Situación Fiscal, contienen el Código QR, que da acceso a la denominación social, régimen de cápita, fecha de constitución, fecha de inicio de operaciones, situación del contribuyente, domicilio fiscal y el régimen fiscal, datos que son de naturaleza pública y por lo tanto, no resulta procedente su clasificación, en términos del articulo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por su parte, las cadenas originales y sellos**,** por sí solos las cadenas y los sellos originales no contienen datos personales confidenciales, por lo que se considera que no actualizan en supuesto de confidencialidad previsto en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, pues únicamente se conforman del Registro Federal de Contribuyentes del proveedor, mismo que es público, por lo que, son información que permite corroborar la legitimidad de la Constancia de Situación Fiscal.

* **Firma de los servidores públicos**

Al respecto, cabe precisar que si bien la firma, por regla general, es un dato personal confidencial, también lo es, que da cuenta de las obligaciones del servidor público para ingresar al servicio público.

Sobre esta situación, cabe señalar que la firma de servidores públicos, vinculada al ejercicio de la función pública es información de naturaleza pública, pues documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones, lo cual acontece en el presente caso, pues, los documentos donde se testa la firma del servidor público del IFREM dan cuenta de la legalidad del documento que expide en ejercicio de sus funciones.

Situación que se robustece, con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con número de registro SO/002/2019, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Firma y rúbrica de servidores públicos.*** *Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.”*

Conforme a lo expuesto, no procede la clasificación, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en los documentos expedidos por autoridades o servidores públicos que dan certeza y legalidad de los documentos que expiden en ejercicio de sus facultades y atribuciones.

* **Credencial para Votar**

Sobre este documento, se debe señalar que la responsabilidad de formar el Padrón Electoral y expedir la credencial de elector, corresponde a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 54, apartado 1, incisos b) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De manera particular el artículo 156, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que la credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos:

***a)*** *Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;*

***b)*** *Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;*

***c)*** *Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;*

***d)*** *Domicilio;*

***e)*** *Sexo;*

***f)*** *Edad y año de registro;*

***g)*** *Firma, huella digital y fotografía del elector;*

***h)*** *Clave de registro, y*

***i)*** *Clave Única del Registro de Población.*

***2.*** *Además tendrá:*

***a)*** *Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;*

***b)*** *Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;*

***c)*** *Año de emisión;*

***d)*** *Año en el que expira su vigencia, y*

***e)*** *En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el Extranjero”.*

Como se advierte, todos los elementos contenidos en la credencial hacen a su titular, identificado, identificable e incluso ubicable en su domicilio. El número o la clave de la credencial de elector son únicos e irrepetibles y; de manera general este documento es utilizado para identificarse al momento de realizar trámites oficiales y de tipo privado, incluso en algunos lugares se tiene por costumbre tomar datos de la credencia para asentar en un documento como manera de acreditar la presentación de su titular y comprobar que la credencial se tuvo a la vista, por ello su relevancia y lo delicado de su uso.

Es de tener presente que la finalidad esencial de la credencial para votar con fotografía es la de ejercer el derecho humano de votar y ser votado; sin embargo, en el país, este documento es el reconocido a nivel general como medio idóneo para identificarse incluso de manera oficial; en el Estado de México está reconocida como identificación oficial en el artículo 2.5 Bis, fracción II del Código Civil del Estado de México.

Dada esta relevancia y que no guarda relación directa con el ejercicio de atribuciones de servidores públicos es que su contenido debe ser analizado en función del documento total, ya que esta obra por ser el medio preferible de identificación como ciudadano y no en función del cargo público, por lo que se entiende que se analizan en su conjunto los datos personales contenidos en la misma; por lo que, en el presente caso, se considera que la credencial de elector, es confidencial y actualiza la causal de clasificación, establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Estados financieros y contables (acciones de empresa)**

Al respecto, caber recordar el Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así́ como, para la Elaboración de Versiones Públicas, que establece que la información susceptible a ser clasificada la siguiente:

* La que se refiera al patrimonio de una persona moral, y
* La que comprenda hechos y actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una persona, que pudiera ser útil para un competidor; así como, aquella relativa a detalles sobre el manejo de una empresa, sobre su proceso de toma de decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones.

Conforme a lo anterior, los estados financieros, contables e informes financieros actualizan la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Datos Bancarios**

Al respecto, se estima que dichos datos se relacionan con hechos y actos de carácter económico, pues los mismos darían cuenta, de la relación que tiene una institución financiero con un particular, inclusive dichos datos pudieran conformarse de las cuentas bancarias con las que cuenta la servidora pública, o bien, la clabe interbancaria; además, que con dicha información se podría obtener los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas e fondos interbancarios, entre otros movimientos que sean utilizados exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente y por lo tanto, los datos bancarios corresponden a información que se encuentra relacionada con el patrimonio de la persona titular de la cuenta, en el presente caso de la Titular de la Unidad de Transparencia, en su calidad de particular.

A mayor abundamiento, resulta necesario traer a colación el Criterio 10/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mismo que establece lo siguiente:

***“Cuentas bancarias y/o CLABE interbancaria de personas físicas y morales privadas.*** *El número de cuenta bancaria y/o CLABE interbancaria de particulares es información confidencial, al tratarse de un conjunto de caracteres numéricos utilizados por los grupos financieros para identificar las cuentas de sus clientes, a través de los cuales se puede acceder a información relacionada con su patrimonio y realizar diversas transacciones; por tanto, constituye información clasificada con fundamento en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.”*

Por lo cual, se puede colegir que dichos datos no guardan relación con el servicio público ni con los recursos públicos, pues solo corresponde a información, que le atañe a la institución financiera y al cliente; por lo que este número constituye información confidencial al pertenecer exclusivamente al ámbito de la vida privada del trabajador y procede su eliminación de conformidad con el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Fotografía en documento que acredite el último grado de estudios**

Por lo que hace a las fotografías, es preciso señalar que estas dan cuenta de las características físicas de los servidores públicos; por lo que, no debe perderse de vista que la imagen personal es la apariencia física, la cual puede ser captada en dibujo, pintura, escultura, fotografía, y video; la imagen así captada puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios, desde volantes impresos de la forma más rudimentaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisión cine, video, correo electrónico o Internet.

Así, dichos datos constituyen la reproducción fiel de las características físicas de una persona en un momento determinado, por lo que representan un instrumento de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual; lo que en el presente caso, acreditaría e identificaría que una persona es servidor público y que cuenta con determinados conocimientos.

Sobre el tema, resulta necesario traer a colación, el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con número de registro SO/015/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que precisa, “… *cuando se encuentra en un título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial....”*

Conforme al criterio establecido, se desprende que la fotografía que se encuentre en un título o cédula profesional, no es confidencial, pues permite identificar si la persona que se ostenta como profesional, es la que se localiza en los documentos comprobatorios, por lo que, en el presente caso, no procede su clasificación en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Número de cédula profesional.**

Al respeto, es necesario señalar que la cédula profesional, es aquel documento con validez legal, para certificar o demostrar que efectivamente una persona está calificado para ejercer la profesión para la cual se ha preparado y ha recibido un título profesional, conforme a lo referido en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (consultada en la liga <http://consultatucedula.mx/>).

En ese orden de ideas, la cédula profesional, es el documento que adquiere toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico equivalente, con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado la cual es otorgada por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ya que dicha autoridad tiene atribuciones para expedir la cédula correspondiente para el ejercicio profesional y para su identidad en todas sus actividades profesionales, lo anterior toma sustento en los artículos 3° y 23, fracción IV, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México.

En ese contexto, el documento en cuestión da cuenta de la preparación y sirve como medios de identificación, para que su titular lo relacionen con el nivel de estudios con que cuenta, por lo que, se trata de un documento de naturaleza pública; además, que puede dar el grado máximo de estudios de la persona en cuestión.

Además, que dicho número forma parte del Registro Nacional de Profesionistas, y da cuenta de que algún profesionista, en el presente caso, tiene registrado su título, con efectos de patente; por lo que, se considera que el número, al formar parte de un registro público, no actualiza, la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.

* **Código de barras, zona de lectura mecánica de cédula profesional, código bidimensional QR, firma electrónica avanzada del Servidor Público Habilitado facultado y sello digital de tiempo SEP**

Acorde a información de la Secretaría de Educación Pública; con la finalidad de fortalecer las acciones en materia de registro, control y vigilancia del ejercicio profesional, se establece que el código de barras y bidimensional QR, constituyen elementos de seguridad, dado que con su lectura se puede acceder al contenido del documento (Cédula Profesional).

Además, que, con dichos datos, únicamente se localiza, el número de cédula, el nombre completo del servidor público, profesión, año de expedición e institución, al dirigirte únicamente a la página <https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action>.

Por su parte, la firma electrónica avanzada del servidor público habilitado y el sello digital de tiempo SEP, únicamente contiene una serie de dígitos, que de ninguna manera revela datos personales del titular de la cédula profesional, y, al contrario, da validez al documento en cuestión.

Por tales circunstancias, al no revelar datos personales confidenciales del servidor público, se considera que el código de barras, zona de lectura mecánica, código bidimensional o QR, firma electrónica avanzada del Servidor Público Habilitado facultado y sello digital de tiempo SEP, no actualizan la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Cadena original de cédula**

Al respecto, dicho dato se conforma de la fecha y lugar de emisión, la Clave Única de Registro de Población, el nombre del titular de la cédula, datos de la Institución Educativa y la profesión realizada.

En ese contexto, dado que el dato en cuestión revela datos de naturaleza confidencial, a saber, la Clave Única de Registro de Población, misma que como se analizó en párrafos anteriores, es clasificado, se considera que este actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 143, fracción I, de la Ley de la materia.

* **Pago de impuesto predial y el catastro**

El impuesto predial es un pago que deben cubrir los propietarios de una vivienda, el cual se calculará derivado de un avalúo catastral que es un cálculo que toma en cuenta características de una propiedad, como los valores unitarios del suelo y de la construcción, que al multiplicarlos por la superficie del terreno se obtiene, el denominado valor catastral, el cual será utilizado para determinar el monto de impuestos que una persona debe pagar por ser dueño del inmueble.

En otras palabras, el impuesto predial se calculará tomando en cuenta valores como: ubicación del inmueble, valor del suelo, valor de la construcción, tipo de inmueble, características de la propiedad, superficie del terreno y superficie de la construcción.

En ese sentido, toda vez que este impuesto es calculado con base en las características de la propiedad, es decir; es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión inmobiliaria, este da cuenta al haber patrimonial de un particular, por lo que, se advierte que el recibo de pago predial no solamente da cuenta de la información económica o financiera del titular, sino también de alguna manera permite desprender más datos, directos o indirectos sobre su patrimonio y sus obligaciones.

Por lo anterior, este documento deberá clasificarse en su totalidad, por actualizar los supuestos de clasificación previstos en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Carta Poder**

La figura de la carta poder, se encuentra prevista en el Título Noveno del Código Civil del Estado de México, como un documento de carácter privado, firmado por el otorgante en presencia de testigos, mediante el cual autoriza a otra persona para que en su representación realice determinados actos jurídicos.

En ese sentido, se puede entender que el mandato es una declaración unilateral de la voluntad, autónoma, porque puede existir en forma independiente, por la que el apoderado queda investido por el poderdante para realizar un acto a nombre de este. Cabe mencionar que el mandato de acuerdo con el artículo 1.767 del Código Civil del Estado de México, puede ser gratuito cuando así se haya convenido expresamente, por lo que, por lo general este contrato genera una obligación jurídica que suele estar basada en la confianza, lo que hace que se caracterice como un contrato meramente personal.

De tal manera que, ya que este documento cuenta con una naturaleza privada, ya que es creado a voluntad de la persona con la finalidad de que otra realice actos en su nombre y representación, es un documento que atañe netamente a la esfera privada del individuo, lo que actualiza la fracción I del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, por lo que, resulta procedente clasificarlo en su totalidad.

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que si bien el Sujeto Obligado, hizo entrega a través del Informe Justificado de los documentos que daban cuenta de lo peticionado, lo cierto es, que estos se entregaron en una versión pública incorrecta; por lo que, para atender de manera correcta la solicitud, deberá entregar los documentos remitidos en Informe Justificado junto al acuerdo emitido por el Comité de Transparencia en el que de manera fundada y motivada señales los datos confidenciales en los documentos.

Al respecto, conforme al artículo 3°, fracción XLV, relacionado con el 137, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, cuando un documento contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender al requerimiento informativo, deberá elaborar una versión pública correcta en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Para tal situación, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública en los términos planteados en la presente Resolución, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos previamente señalados, fundando y motivando la clasificación.

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **REVOCAR** la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Chicoloapan, e instruye al Sujeto Obligado a efecto de que, entregue, a través del SAIMEX, en versión pública correcta, los documentos entregados en informe justificado.

**Términos de la Resolución**

Se le hace del conocimiento al Particular, que, en el presente caso, se le concede la razón, pues el Ayuntamiento de Chicoloapan, en un principio señaló no contar con la información solicitada. Derivado de ello, en un acto posterior, a través de la presentación de su Informe Justificado, remitió la información que es de interés del solicitante. Sin embargo, esta se encuentra en una versión pública incorrecta, por lo que deberá realizar la versión pública correcta de la misma, la cual deberá acompañar con su respectiva Acta del Comité de Transparencia, en la que funde y motivé la clasificación de la información.

Finalmente, se le informa que la labor de este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de los datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **REVOCA** la respuesta entregada por el Ayuntamiento de Chicoloapan, a la solicitud de información 00016/CHICOLOA/IP/2024 por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Particular, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Ente Recurrido, a efecto de que, entregue, a través del SAIMEX, en versión pública correcta, los expedientes relacionados con los permisos de funcionamiento de los comercios ubicados en el tramo de la carreta México – Texcoco, del municipio de Chicoloapan, que fueron remitidos en Informe Justificado.

Además, deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos o información clasificada, en la versión pública, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 143, fracción I y 149, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA CON VOTO PARTICULAR Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.